

## Datos del Expediente

**Carátula:** AGUILO MARIA LUZ y otros C/ MUNICIPALIDAD DE AZUL S/ AMPARO

**Fecha inicio:** 30/12/2025      **Nº de Receptoría:** AZ - 6480 - 2025 **Nº de Expediente:** 20362

**Estado:** Fuera del Organismo

## Pasos procesales:

Fecha: 31/03/2026 - Trámite: SENTENCIA DEFINITIVA - ( FIRMADO )

[Anterior](#) 31/03/2026 10:49:45 - SENTENCIA DEFINITIVA [Siguiente](#)

## REFERENCIAS

**Funcionario Firmante** 31/03/2026 10:32:55 - FERNANDEZ DE VILLEGAS Bernardo Juan Cecilio - JUEZ

**Funcionario Firmante** 31/03/2026 10:35:39 - PATERNICO Marcelo Enrique - MAGISTRADO SUPLENTE

**Funcionario Firmante** 31/03/2026 10:42:41 - LABORDE Martin - JUEZ

**Funcionario Firmante** 31/03/2026 10:49:44 - CANOSA Alberto Andres - AUXILIAR LETRADO

**Nro. Notificación Electrónica** 143321214

**Nro. Notificación Electrónica** 143321221

-- NOTIFICACION ELECTRONICA

**Fecha de Libramiento:** 31/03/2026 10:49:50

**Fecha de Notificación** 06/04/2026 00:00:00

**Notificado por** CANOSA ALBERTO ANDRES

-- REGISTRACION ELECTRONICA

**Año Registro Electrónico** 2026

**Código de Acceso Registro Electrónico** BBA2FF19

**Fecha y Hora Registro** 31/03/2026 10:50:06

**Número Registro Electrónico** 154

**Prefijo Registro Electrónico** RS

**Registración Pública** SI

**Registrado por** CANOSA ALBERTO ANDRES

**Registro Electrónico** REGISTRO DE SENTENCIAS

## Texto del Proveído

----- Para copiar y pegar el texto seleccione desde aquí (sin incluir esta línea) -----

En la ciudad de Azul, reunidos en acuerdo ordinario los Jueces del Tribunal para dictar sentencia en los autos caratulados “**AGUILO MARIA LUZ Y OTROS C/ MUNICIPALIDAD DE AZUL s/ RECURSO DE AMPARO -Expediente nº: 20.362**, se procedió a practicar la desinsaculación de ley, resultando que en la votación, debía observarse por los Jueces el siguiente orden: Doctor Bernardo FERNANDEZ DE VILLEGAS; Doctor Marcelo Enrique PATÉRNICO y Doctor Martín LABORDE. Acto seguido, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes

## CUESTIONES

**1º) ¿Es procedente la demanda instaurada?**

**2º) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?**

### **ANTECEDENTES**

**A-)** Se presentan en autos los Sres. Boubee Cristina María (D.N.I 14.274.280), Ignacio Martín Martínez (D.N.I 29.695.924), Koerner Simón (D.N.I 34.942.332), Maidana Leandro Raúl (D.N.I 37.762.270), Lindner Aldo César (D.N.I 11.614.939), Cavallo Eduardo César (D.N.I 11.299.956), Marino Matías Albano (D.N.I 27.258.726), Alvano María Inés (D.N.I 24.732.242), Aguiló María Luz (D.N.I 10.390.129), Russo Roberto Pablo (D.N.I 18.195.223), Barrera Rafael Juan (D.N.I 10.228.177), Ocampo Martín María (D.N.I 23.087.014), Marcos María Ocampo (D.N.I 14.886.181), Alejandro Rodolfo Boubee (D.N.I 16.752.814), Bellesi Enrique Pablo (D.N.I 11.938.148), Marchegiani Guillermo José (D.N.I M4.627.260), Luongo Juan Carlos (D.N.I 8.406.865) Premoli Luis Javier (D.N.I 14.642.630) y Matías Julián Riveros (D.N.I 44.256.029) todos con el patrocinio letrado del Dr. Pablo A. Torres Barthe interponiendo acción de amparo contra la MUNICIPALIDAD DE AZUL, por la negativa a proporcionar documentos de información pública.-

Solicitan se condene al Municipio a entregar la documentación y/o información solicitada en la presentación administrativa realizada el día 9 de octubre del año 2025, entienden que su pedido de acceso a la información pública se encuentra resguardado en el artículo 20 inciso 2 de la constitución provincial, y en la ley provincial 12.475 (art. 8 y siguientes) y en los artículos 2 y 4 de la ley 13928.-

Los actores requieren la siguiente información:

- 1)** Haga entrega de Copia de los Balances correspondientes a los 48 meses, tanto de los balances anuales, como de los balances realizados mensualmente, y los anexos del mismo, libros de Ingresos y Egresos, etc.;
- 2)** Copia Matriz de Costos de utilizada como fundamento para la aprobación de las ordenanzas que fija la tasa destinada al mantenimiento de caminos rurales, como asimismo, presupuestos utilizados para su confección, valores de referencia y demás documentación anexa en la que se base el cálculo consignado en dicha matriz;

- 3)** Informe cantidad de Kilómetros de caminos rurales e infraestructura vial a mantener por esa Comuna, detallando caminos secundarios y terciarios, ancho de los mismos, discriminados por zonas, etc.;
- 4)** Informe cual es la extensión del municipio de Azul, discriminando cantidad de Hectáreas Rurales y Superficie Urbana, y padrón de Propietarios de Inmuebles Rurales y Urbanos;
- 5)** Matriz de costos del Mantenimiento de Caminos Rurales, conservación de la vía pública, mantenimiento y conservación tomada como base para la decisión al momento de fijar las tasas vigentes mencionadas; como, asimismo, presupuestos utilizados para su confección, valores de referencia y demás documentación anexa en la que se base el cálculo consignado en dicha matriz;
- 6)** Informe Ingresos del Municipio de Azul y durante los últimos cuatro años, discriminando en cada uno de ellos: a)- Conservación de la vía pública; b)- Mantenimiento y conservación; c)- Ingresos por otros Impuestos y tasas urbanas; d)-Contribuciones varias y su objeto- e)- Fondos recibidos de la Provincia de Buenos Aires en concepto de impuestos coparticipables; e)- Fondos recibidos por cualquier otro concepto en el período señalado (Subsidios y/o aportes del gobierno Provincial o Nacional, etc.);
- 7)** Listado de Cheques emitidos por el Municipio de Azul desde el 1 de enero de 2024 a la fecha, consignando: Numero de Cheque, fecha de emisión, beneficiario, número de factura abonada con cada uno de ellos, monto y concepto por el cual se abona;
- 8)** Listado de Transferencia efectuadas desde la Cuenta Oficial del Municipio de Azul desde el 1 de enero de 2024 a la fecha, consignando: Numero de CBU de la cuenta a la que fuera realizada, fecha de la transferencia, beneficiario, Numero de factura abonada por cada una de ellas, monto y concepto por el cual se abona.
- 9)** Las ordenanzas impositivas y el cálculo de recursos y el presupuesto de gastos en los términos del art. 29 de la ley orgánica de municipalidades de los años 2023 y 2024.
- 10)** Informe cual fue las últimas 10 acciones de la comuna destinada al mantenimiento de caminos rurales detallando la tarea realizada, la ubicación, su costo y los empleados propios y/o tercerizados que participaron de la misma.-

**11)** Copia Matriz de Costos utilizada como fundamento para la aprobación de las ordenanzas que fija la tasa de recolección de residuos, como, asimismo, presupuestos utilizados para su confección, valores de referencia y demás documentación anexa en la que se base el cálculo consignado en dicha matriz;

**12)** Informe de qué manera se realiza la recolección de residuos en sus diferentes modalidades, radio de recolección, dotaciones e infraestructura disponibles y su costo operativo;

Manifiestan que el día 9 de octubre del año 2025, como ciudadanos y productores sumamente preocupados por la situación actual de los caminos rurales del Partido de Azul y con el fin republicano de controlar los gastos y trabajos que debía realizar el municipio, presentaron una solicitud de acceso a la información pública. -

Refieren que el Municipio se encuentra obligado a brindar información por aplicación de los arts. 1, 11, 12, inc. 4, CP y 75, inc. 22 CN y tratados de derechos humanos que garantizan el derecho a la información pública, y obligan a la administración a brindar dicha información --cfme. Ley 12.475, dto. Reglamentario 2.549/04.-

Agregan que tanto la jurisprudencia nacional como internacional consideran al derecho a la información como un derecho fundamental.

Entienden que la acción iniciada es admisible conforme los arts. 2 y 4, ley 13.928, 20, CP y 43, CN, atento que el derecho de acceso a la información cumple un rol clave de control de los actos de gobierno para el ejercicio de los derechos individuales y colectivos. -

Alegan que el art. 1 de la ley 12.475 otorga derecho a toda persona física o jurídica que tenga interés legítimo en acceder a los documentos públicos.-

Sostienen que, para la provincia de Buenos Aires, conforme surge de los fundamentos del Decreto Reglamentario 2.549/04, rige el principio de publicidad de los actos de gobierno y es de vital importancia el acceso a dicha información por parte de los ciudadanos y que la legitimación para dar inicio a la acción surge de la presentación realizada ante el Municipio, que fuera denegada de forma arbitraria el 22 de octubre del año 2025.-

Al ser ello así, solicitan que mientras tramiten las presentes actuaciones, como medida cautelar, se intime al Municipio a realizar el arreglo de los caminos rurales que se encuentren más

afectados al momento, con su correspondiente rendición de cuentas periódicas sobre la realización de obras ante este juzgado

Finalmente, ofrecen prueba, hacen reserva del caso federal y peticionan.-

Junto con su presentación acompañaron la siguiente documentación: i) solicitud de acceso a la información pública del 09.10.25; y ii) respuesta del Municipio del 22.10.25;

**B.)** El 04/02/2026 se tuvo a los peticionantes por presentados y parte y se corrió traslado de la demanda por el plazo de 5 días --cfme., art. 10, ley 13.928.-

Asimismo, se les hizo saber a los actores que atento la naturaleza de la acción intentada y el objeto de la misma --i.e., derecho de acceso a la información--, la medida cautelar peticionada excedía el objeto de la demanda y debía peticionarse en el marco de un proceso autónomo y/o mediante una acción donde se cuestione la legitimidad de la tasa cuya suspensión de pago se pretende. -

**C.)** El 02/03/2026 se presentó el Dr. Roberto Davila como apoderado del Municipio de Azul, formuló inadmisibilidad de la acción y solicitó el rechazo de la acción con expresa imposición de costas. -

Señaló que *“.... los actores pretenden utilizar el derecho de acceso a la información pública, y ahora la acción de amparo, de manera abusiva y desvirtuada de sus verdaderos sentidos. El acceso a la información pública se dirige a garantizar la publicidad de los actos de gobierno y justamente con ello el adecuado control de la administración pública. La acción de amparo ha sido establecida, y se encuentra reservada, a cuestiones de arbitrariedad manifiesta que claramente no se dan en el caso. Se observa una incoherencia en la pretensión procesal ya que la demanda comienza peticionando el acceso a información para luego pretender la reparación genérica de caminos rurales...”*

Indica que *“... La ley 12475 prevé la impugnación mediante acción de amparo en supuestos donde el acceso a la información pública se ve frustrado. Sin embargo, en el caso concreto además de no haberse frustrado el acceso surge que no se reúnen los presupuestos de procedencia de la acción intentada...”*.

En tal sentido refirió que los accionantes no habrían agotado la instancia administrativa previa al inicio de la presente acción de amparo, toda vez que el expediente administrativo V-143/25, continúa su trámite y en dichas actuaciones administrativas se les hizo saber la falta de cumplimiento de los recaudos legislativos relativos a la acreditación del interés legítimo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 y 5 de la ley 12.475 y que la documentación relativa a la gestión económica – financiera (presupuesto anual de gastos, ordenanzas fiscales e impositivas – rendición de cuentas) son de acceso público.

Continúa diciendo que la presente acción no reúne los requisitos legales que habilitan su tratamiento, debido a que carece de acto particular de aplicación que autorice el control constitucional y que existen otros remedios ordinarios idóneos para la defensa de los derechos de los actores. -

Asimismo, manifestó que la acción judicial es de carácter subsidiario y solo procede ante la vulneración de derechos fundamentales cuando no hay otro medio legal más idóneo y que en el caso se requiere acreditar la negación actual o inminente, arbitraria o ilegal al acceso a la información pública. Expuso la improcedencia de la medida cautelar peticionada y finalmente, ofreció prueba, e hizo reserva del caso federal.-

**D.)** El día viernes 20 de marzo del corriente año, mediante la aplicación Microsoft Teams se llevó a cabo la audiencia de depuración de prueba, cuya constancia obra en el acta pertinente como así también en el registro fílmico de la misma. -

**E.)** La parte actora desistió en la citada audiencia de la prueba informativa, pericial contable, testimonial y se incorporó en autos el expediente administrativo V-143/25 ofrecido por ambas partes, del cual surgen los siguientes datos relevantes para la causa: 1.- que el 15/10/2025 el Sr. Intendente Municipal de Azul, Sr. Nelson Sombra, giro las actuaciones a la Subsecretaría Legal y Técnica del Municipio; 2.- que el 22/10/2025, la mencionada Subsecretaría emitió dictamen rechazando el pedido de acceso a la información pública formulado por los accionantes. -

Consecuentemente hallándose la causa en estado de dictar sentencia, el Tribunal decide la siguiente

## **VOTACIÓN**

**A la primera cuestión, el Juez FERNANDEZ DE VILLEGAS dijo:**

Reseñados los antecedentes de la causa, en primer lugar, encuentro necesario expedirme respecto a la procedencia de la vía intentada. En tal sentido cabe señalar que la Constitución Nacional, desde su Preámbulo y artículo 1°, establece el principio republicano de gobierno, del cual deriva la exigencia de publicidad de los actos del Estado, tendiente a que los ciudadanos puedan conocer los actos de gobierno y controlar a sus representantes, de modo tal que como regla general puede decirse que toda persona ha de tener acceso a la información pública, derecho que implícitamente emana de los enunciados generales de los artículos 1° y 33 de la Constitución Nacional, dentro del contenido ínsito en la libertad de expresión consagrada en el artículo 14 de la carta magna.-

Por su parte la Constitución bonaerense prevé expresamente -en su artículo 12 inciso 4°- el derecho a toda persona a la información y a la comunicación, el cual también encuentra eco tácito en los artículos 1, 11 y 38 de aquel estatuto fundamental.

A su vez, este derecho sustancial encuentra análoga consagración en diversos tratados internacionales que cuentan con jerarquía constitucional de acuerdo a lo establecido en el artículo 75 inciso 22° de la Ley Fundamental: artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 19.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y artículo 19.2 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.

En el ámbito nacional el derecho a la información pública se encuentra regulado en la ley 27.275 y en el dto. 1.172/03, mientras que en la provincia de Buenos Aires lo está en la ley 12.475 (conf. Decreto reglamentario 2.549/04), que dispone que toda persona física o jurídica tiene derecho de acceso a documentos administrativos de naturaleza pública correspondientes a organismos, entidades, empresas, sociedades, dependencias y todo otro ente que funcione bajo jurisdicción del Poder Ejecutivo provincial, creando un ámbito normativo que permite el conocimiento de cierta información generada por el Estado que se encuentre plasmada en un documento administrativo, mediante un mecanismo que promueve el respeto de los principios de igualdad, publicidad, celeridad, informalidad, accesibilidad y gratuidad (arts. 5 a 11).-

La información en poder de los sujetos obligados se presume pública y aquella que pueda estar amparada por sus taxativas excepciones --cfme., arts. 6 y 16, anexo I, dto. 2.549/04--, es de interpretación restrictiva debiéndose, en caso de duda, decidirse siempre en favor de la mayor vigencia y alcance del derecho a la información que se rige por el principio de máxima

divulgación, pues el actuar del Estado debe encontrarse regido por los principios de publicidad y transparencia en la gestión pública (*SCJBA causa A. 70.571 "Asociación por los Derechos Civiles" del 29.12.14*)

Este derecho constituye una importante herramienta de control cívico que contribuye a fortalecer la transparencia y el control de la gestión pública como pilares fundamentales de una sociedad democrática. Así, existe una directa vinculación entre el acceso a la información y el resguardo de la transparencia y la publicidad de la gestión de los asuntos. Ello además se ve reforzado por el principio de máxima divulgación que rige en la materia, según el cual toda información en poder de autoridades públicas debe presumirse accesible, sujeta a un sistema restringido de excepciones legales (*CSJN Fallos 335:2393 "Asociación por los derechos civiles"; 337:256 "CIPPEC"; 339:827 "Garrido"*)

Que, en el ámbito propio de este proceso, el progreso de la vía excepcional elegida procede contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por la Constitución Nacional, un tratado o una ley (*conf. artículo 43, de la Constitución Nacional, artículo 20 inciso 2, de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y artículo 1° Ley 13.928*). -

En este orden de ideas, debe puntualizarse que esta vía tiene como presupuesto la acción u omisión de órganos o agentes de la autoridad pública, que adolezca de arbitrariedad manifiesta, lo que excluye que pueda convertirse en una instancia en que los jueces asuman facultades propias de otros poderes o autoridades públicas, o se constituyan en revisores de su actuar dentro de las normas respectivas (*CSJN, Fallo 302:535*).

Por su parte, es menester destacar que es doctrina reiterada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que el amparo constituye un proceso excepcional sólo utilizable en las más delicadas y extremas situaciones en las que, por carencia de otras vías aptas, peligra la salvaguarda de derechos fundamentales y exige –para su apertura– circunstancias muy particulares, caracterizadas por la presencia de arbitrariedad o ilegalidad manifiestas, de modo tal que las deficiencias referidas –a que alude la Ley 16.986 y la jurisprudencia anterior y posterior a su sanción–, requieren que la lesión de los derechos o garantías reconocidos por la Constitución Nacional resulten del acto u omisión de la autoridad pública en forma clara e inequívoca, sin



necesidad de un largo y profundo estudio de los hechos ni de un amplio debate y prueba (CSJN, Fallos 301:1060; 306:1253 y 307:747)

Que, sentado ello, debe señalarse que, el derecho de acceso a la información pública de los ciudadanos sobre las actividades de la Administración constituye una exigencia elemental del Estado Democrático de Derecho, pues se trata de un Derecho Humano fundamental, un instrumento para la participación ciudadana, un elemento para garantizar otros derechos, una herramienta para mejorar la gestión pública, y por último, constituye una vía indispensable para el control de la *res pública*.

Consiguientemente, la interpretación de las disposiciones de la Ley 12.475, o de cualquier reglamentación del derecho de acceso a la información, debe ser efectuada, en caso de duda, siempre en favor de la mayor vigencia y alcance del derecho a la información.

Por despacho del 4 de febrero del corriente año se otorgó a la pretensión el trámite de acción de amparo, que prevé el proceso de amparo como la vía breve y expedita con aptitud suficiente para la protección eficaz de los derechos que tiende a tutelar (*art. 8, ley 12475 y 20, inc. 3, Constitución de la Provincia de Buenos Aires*).-

El régimen normativo provincial establece que contra las decisiones que deniegan el acceso a documentos administrativos --ya sea en forma expresa o por silencio-- podrán interponerse los recursos administrativos y/o acciones que el ordenamiento jurídico permita (*arts. 7 y 8, ley 12.475, y 17, 18 y cc dto. reglamentario 2.549/04*)

De allí que la denegación expresa o tácita al acceso a la información pública, está equiparada a la impugnación de un acto administrativo que puede ser cuestionado tanto en sede administrativa a través de los recursos previstos en la ley de procedimientos administrativos, como en sede judicial a través de las acciones contempladas en el CCA, y en la ley de amparo provincial (*SCJBA causa A. 70.571, "Asociación por los Derechos Civiles", del 29.12.14*).-

Así, la procedencia de la garantía del amparo en materia de acceso a la información pública ha sido receptada por la SCJBA (*causas B. 77.402, "Organización de Ambientalistas Autoconvocados", del 21.12.22; B. 77.433, "Lowy", del 10.2.23; B. 78.108, "Etulain", del 13.4.23; B. 78.744 "Frade", del 21.10.23*).-

Asimismo, la CSJN ha admitido la vía procesal de la acción de amparo para supuestos como el de autos, estableciendo la necesidad de que exista un recurso sencillo, rápido y efectivo para casos donde se analiza la violación al derecho de quien solicita información (*Fallos 335:2393 “Asociación Derechos Civiles”, in re “Stolbizer, Margarita EN - MO Justicia DDHH s/ Amparo ley 16.986”, expte. CAF39019/2014/CA1-CS1, del 1.9.15; “Gil Lavedra, Ricardo Rodolfo y otro c/ EN – M° Planificación Federal s/ amparo ley 16.986”, expte. G.36.L, del 14.10.14*)

Por lo expuesto, el amparo constituye una vía idónea para canalizar la pretensión objeto de autos, en los términos del arts. 7 y 8, ley 12.475.-

Y en el caso que nos ocupa la Municipalidad de Azul sostiene que no existió un acto denegatorio que vulneró el derecho de los actores ya que el expediente administrativo se encuentra en trámite, y han sido los peticionantes quienes guardaron silencio y no lo impulsaron.-

Desde una perspectiva estrictamente formal un dictamen es un acto preparatorio, en el marco específico del derecho fundamental de acceso a la información, su efecto material -a mi juicio- debe prevalecer sobre la forma. La conducta de la Administración configuró una negativa fáctica y una barrera ilegítima al ejercicio del derecho. Dicha respuesta, en la práctica, clausuró la vía administrativa y tuvo el inequívoco efecto de una denegatoria.

Sobre este punto, cabe recordar que la propia Ley provincial n° 12.475 establece en sus artículos 7 y 8 que, transcurrido el plazo legal sin respuesta, la solicitud se considerará denegada tácitamente, habilitando la vía judicial del amparo. Frente a ello, habiendo presentado los actores su solicitud el 9 de octubre del 2025, al momento de interponer la acción de amparo el 30/12/25, el plazo de treinta días hábiles había vencido con creces, configurándose así la denegatoria tácita que habilita de pleno derecho la vía intentada, tornando innecesario el agotamiento de cualquier otra instancia como postula la recurrente.

Finalmente, la jurisprudencia de nuestros máximos tribunales es conteste en afirmar que el derecho de acceso a la información pública requiere de una tutela judicial rápida y efectiva. Como ha sido señalado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el precedente “Asociación Derechos Civiles” (Fallos: 335:2393), ha enfatizado la necesidad de que exista un “recurso sencillo, rápido y efectivo para determinar si se ha producido una violación al derecho”, siendo el amparo la vía idónea por excelencia para tal fin, tal como lo recepta la legislación provincial.

Así por aplicación de los principios de informalismo, a favor del ciudadano, impulso e instrucción de oficio y debido acceso a la información pública, la administración debió resolver en forma expresa, fundada y dentro de un plazo razonable --30 días máximo según el art. 7 ley 12.475-- si otorgaba la información y documentos reclamados y/o existían argumentos y/o bienes jurídicos superiores que aconsejaban restringir el acceso a los documentos peticionados.-

La existencia de un dictamen jurídico no abastece ni sustituye la existencia del acto administrativo que resuelve la pretensión. -

La omisión de la administración en pronunciarse en forma expresa a la solicitud de documentación requerida, habilita en los términos antes señalados la presentación de la acción (cfme. arts. 7 y 8, ley 12.475).-

De acuerdo a la postura de las partes y marco jurídico aplicable el *thema decidendum* radica en establecer si la Municipalidad de Azul, debe brindar la información requerida en sede administrativa --i.e., si existió una omisión a su otorgamiento--.-

Los actores con la información solicitada pretenden conocer el modo en el cual se calcula y ejecuta el presupuesto asignado al servicio público de conservación de caminos rurales y el destino de la tasa para el mantenimiento de estos caminos.-

El Municipio plantea que no existió una real negativa e imposibilidad de acceso a la información. Sostiene que la documentación relativa a la gestión económico financiera del Departamento ejecutivo, como el presupuesto anual de gastos, las ordenanzas fiscales e impositivas y la rendición de cuentas, son de acceso público y se difunden por canales ordinarios de publicidad (Boletín Oficial, publicación en la página web oficial, etc.),

Ahora bien es dable entender, que en caso de denegarse una solicitud de información pública ello debe hacerse mediante una decisión escrita, debidamente fundamentada, que permita conocer cuáles son los motivos y normas en que se basa para no entregar la información en el caso concreto (CSJN Fallos 335:2393 "Asociación Derechos Civiles"; 338:1258 "Giustiniani"; 342:208 "Savoia").

Asimismo debe tenerse presente que las tasas, al igual que los impuestos y demás contribuciones, se derivan del poder de imperio del Estado. Se diferencian de estos últimos, por el presupuesto de hecho escogido para hacer nacer la obligación tributaria. En el caso de las tasas,

se exige que exista una actividad estatal, específica e individualizada que atañe al sujeto pasivo de la relación jurídica tributaria.

La tasa tiene como hecho generador la prestación de un servicio público individualizado al contribuyente, y su recaudación y posterior erogación tiene un destino, solventar el servicio que constituye el presupuesto de la obligación y que se encuentra a cargo del Ejecutivo Municipal llevar la contabilidad de manera que se refleje claramente su situación patrimonial y financiera y proyectar las ordenanzas impositivas y el presupuesto de gastos y recursos (*art. 159, 192 y cc CP; 109, 117, 165, 166, 167, 226, 282 y cc, LOM y 1, 19, y 21, ley 10.869*)

Además, los recursos y los gastos se clasificarán según su finalidad, naturaleza económica y objeto y se deberán prever, en las respectivas finalidades, aperturas de programas que identifiquen los gastos de los principales servicios (*art. 112 y ss Ley Orgánica de Municipalidades*).

Del régimen normativo aplicable se desprende que el organismo de resguardo de la documentación atinente a la contabilidad municipal, de realización del proyecto de las ordenanzas impositivas y el presupuesto de gastos y recursos y la rendición de cuentas, es el Departamento Ejecutivo Municipal, quien debe someter a consideración de los órganos de control y fiscalización (Concejo Deliberante y Tribunal de Cuentas Provincial) los documentos en los que la erogación y/o el ingreso tiene reflejo y justificación jurídica-contable.

Así, la información presupuestaria, económico financiera y de desempeño fiscal municipal reviste carácter público, no solo por ser materia inherente al control del gobierno, sino también porque **sus recursos se conforman sustancialmente con los aportes de los ciudadanos** (*CSJN in re "Mihura Estrada Ricardo y otros c/ Colegio Público de Abogados de la Capital Federal s/ amparo ley 16.986" del 18.3.21*)

La existencia de controles mutuos entre los distintos departamentos municipales y/o aquella ejercida por el Tribunal de Cuentas, no impide que los ciudadanos en forma directa tengan acceso a los documentos y a la contabilidad del Municipio --en la medida que no se pongan en crisis derechos de terceros-- a fin de ejercer el debido control a las autoridades constituidas y el resguardo de sus derechos constitucionales. -

Así el acceso a la información pública por parte del ciudadano se configura en una atalaya desde donde resguardar la transparencia de la gestión de gobierno, valor democrático que implica la publicidad de los actos de gobierno y la apertura de la rendición de cuentas en la gestión pública (arts. 1, 33, 38, 41, 42, 75 inc. 22, cc, CN; 10 y 13, párrafo 5 de su preámbulo y III.11 y XIV.2 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención Interamericana contra la Corrupción, 13.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 19, inc. 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y 1, 11, 12, inc. 4, 38 y cc, CP, sobre la operatividad de la normativa citada, ver CSJN Fallos 335:2393 "Asociación Derechos Civiles"; 337:256 "CIPPEC"; 339:827 "Garrido"; 342:208 "Savoia", SCJBA causa A. 72.274 "Albaytero" del 9.3.16 art. 193 CP, ley 12.475)

De la normativa citada y el marco jurídico descripto *supra* se desprende que el Municipio debe garantizar el acceso a la información al ciudadano en forma directa y ante su requerimiento, permitiendo la consulta de la totalidad de la documentación y/o cualquier otro tipo de registro utilizado para la elaboración del proyecto de presupuesto y/o de las ordenanzas impositiva y fiscal, en el marco del deber de transparencia que rige la actividad administrativa.-

De tal manera, y por todo lo dicho, considero que la Municipalidad de Azul deberá poner a disposición de los requirentes la documentación que a continuación se enumera: **1)-** Copia de los Balances correspondientes a los 48 meses, tanto de los balances anuales, como de los balances realizados mensualmente, y los anexos del mismo, libros de Ingresos y Egresos, etc.; **2)-** Copia Matriz de Costos de utilizada como fundamento para la aprobación de las ordenanzas que fija la tasa destinada al mantenimiento de caminos rurales, presupuestos utilizados para su confección, valores de referencia y demás documentación anexa en la que se base el cálculo consignado en dicha matriz; **3)-** Informe cantidad de Kilómetros de caminos rurales e infraestructura vial a mantener por esa Comuna, detallando caminos secundarios y terciarios, ancho de los mismos, discriminados por zonas, etc.; **4)-** Informe cual es la extensión del Municipio de Azul, discriminando cantidad de Hectáreas Rurales y Superficie Urbana, y padrón de Propietarios de Inmuebles Rurales y Urbanos; **5)-** Matriz de costos del Mantenimiento de Caminos Rurales, conservación de la vía pública, mantenimiento y conservación tomada como base para la decisión al momento de fijar las tasas vigentes mencionadas; como, asimismo, presupuestos utilizados para su confección, valores de referencia y demás documentación anexa en la que se base el cálculo consignado en dicha matriz; **6)-** Informe Ingresos del Municipio de Azul y durante los

últimos cuatro años, discriminando en cada uno de ellos: a)- Conservación de la vía pública; b)- Mantenimiento y conservación; c)- Ingresos por otros Impuestos y tasas urbanas; d)- Contribuciones varias y su objeto- e)- Fondos recibidos de la Provincia de Buenos Aires en concepto de impuestos coparticipables; e)- Fondos recibidos por cualquier otro concepto en el período señalado (Subsidios y/o aportes del gobierno Provincial o Nacional, etc.); **7)-** Las ordenanzas impositivas y el cálculo de recursos y el presupuesto de gastos en los términos del art. 29 de la ley orgánica de municipalidades de los años 2023 y 2024; **8)-** Informe cual fue las últimas 10 acciones de la comuna destinada al mantenimiento de caminos rurales detallando la tarea realizada, la ubicación, su costo y los empleados propios y/o tercerizados que participaron de la misma.

Para el caso que el Municipio careciera de estos últimos documentos, por no haber realizado ningún análisis de costo de los servicios involucrados, o no haberlo reflejado en un documento oficial, deberá ponerlo de manifiesto en forma expresa e indicar en forma genérica los rubros directos incluidos en la contabilidad asignados a la prestación de los servicios involucrados. -

La solución que aquí propongo es acorde a lo resuelto por otros precedentes a los cuales me remito (Juzgado Contencioso Administrativo Federal 9, causa 8211/2024 "Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires c/ Superintendencia de Riesgos del Trabajo s/ Amparo Ley 16.986", Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de San Martín, SI-11520-2024, "Asociación de Médicos de la República Argentina c/ Municipalidad de Pilar s/ Recurso de Amparo"; TL-12915-2025 "Berisso Francisco y otros c/ Municipalidad de Hipólito Yrigoyen s/ Amparo".; SCBA causa I. 73.783, "Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS) c/ Provincia de Buenos aires s/ Inconstitucionalidad ley 12.475" 27-10-2025.-

Cabe reiterar que el otorgamiento de la documentación peticionada por los actores tiende a determinar la correcta asignación de los recursos públicos. -

Al ser ello así, surge acreditado que la Municipalidad de Azul no dio acceso la información requerida por los actores, ni justificó mediante un acto administrativo las causas que impedían su otorgamiento (*arts. 75, inc. 22 CN; IV DADDH; 13.3 CADH; 12, inc. 4, CP; leyes 12.475 y 27.725*)

En razón de lo expuesto la demandada deberá brindar a los actores, en forma completa, veraz y adecuada, la información pública que oportunamente solicitaron en sede administrativa, con

excepción de la indicada en los puntos 7, 8, 11 y 12, del escrito de demanda, toda vez que los mismos exceden el objeto de la presente acción de amparo.-

A esos fines, considerando la complejidad de la información requerida, resulta razonable otorgar a la demandada un plazo de cuarenta y cinco --45-- días hábiles, computados desde que la presente adquiera firmeza.-

Por ello considero que las costas del proceso deben ser impuesta a la demandada vencida --arts. 19 ley 13.928, y 68, CPCC-. -

### **Así lo voto**

**A LA PRIMERA CUESTION:** El doctor PATERNICO, por las consideraciones expuestas por el doctor FERNANDEZ DE VILLEGAS, adhiere y vota en análogo sentido (arg. Arts. 168 y 171 Constitución de la Provincia de Buenos Aires; SCBA, R 112.328, S del 06.10.2010, autos “Cabrera, Héctor Daniel v. Ruhl, Juan s/Despido”).

**A LA MISMA CUESTION:** El doctor LABORDE, por las consideraciones expuestas por el doctor FERNANDEZ DE VILLEGAS, adhiere y vota en análogo sentido (arg. Arts. 168 y 171 Constitución de la Provincia de Buenos Aires; SCBA, R 112.328, S del 06.10.2010, autos “Cabrera, Héctor Daniel v. Ruhl, Juan s/Despido”).

### **A la segunda cuestión, el Juez FERNANDEZ DE VILLEGAS dijo:**

Atento el resultado que surge de la votación a la cuestión anterior, corresponde entonces:

**1.- HACER** lugar a la acción de amparo promovida y ordenar a la Municipalidad de Azul a que, dentro del plazo de 45 días hábiles, computados desde que adquiera firmeza la presente, ponga a disposición de los actores, en forma completa, veraz y adecuada, la información pública consistente en: **1)-** Copia de los Balances correspondientes a los 48 meses, tanto de los balances anuales, como de los balances realizados mensualmente, y los anexos del mismo, libros de Ingresos y Egresos, etc.; **2)-** Copia Matriz de Costos de utilizada como fundamento para la aprobación de las ordenanzas que fija la tasa destinada al mantenimiento de caminos rurales, presupuestos utilizados para su confección, valores de referencia y demás documentación anexa en la que se base el cálculo consignado en dicha matriz; **3)-** Informe cantidad de Kilómetros de caminos rurales e infraestructura vial a mantener por esa Comuna, detallando caminos

secundarios y terciarios, ancho de los mismos, discriminados por zonas, etc.; **4)-** Informe la cual es la extensión del municipio de Azul, discriminando cantidad de Hectáreas Rurales y Superficie Urbana, y padrón de Propietarios de Inmuebles Rurales y Urbanos; **5)-** Matriz de costos del Mantenimiento de Caminos Rurales, conservación de la vía pública, mantenimiento y conservación tomada como base para la decisión al momento de fijar las tasas vigentes mencionadas; como, asimismo, presupuestos utilizados para su confección, valores de referencia y demás documentación anexa en la que se base el cálculo consignado en dicha matriz; **6)-** Informe Ingresos del Municipio de Azul y durante los últimos cuatro años, discriminando en cada uno de ellos: a)- Conservación de la vía pública; b)- Mantenimiento y conservación; c)- Ingresos por otros Impuestos y tasas urbanas; d)- Contribuciones varias y su objeto- e)- Fondos recibidos de la Provincia de Buenos Aires en concepto de impuestos coparticipables; e)- Fondos recibidos por cualquier otro concepto en el período señalado (Subsidios y/o aportes del gobierno Provincial o Nacional, etc.); **7)-** Las ordenanzas impositivas y el cálculo de recursos y el presupuesto de gastos en los términos del art. 29 de la ley orgánica de municipalidades de los años 2023 y 2024; **8)-** Informe cual fue las últimas 10 acciones de la comuna destinada al mantenimiento de caminos rurales detallando la tarea realizada, la ubicación, su costo y los empleados propios y/o tercerizados que participaron de la misma, debiendo dar respuesta íntegra y detallada a la totalidad de los interrogantes planteados.-

**2.- IMPONER** las costas a la demandada (arts. 19, ley 13.928, y 68, CPCC).-

**3.- REGULAR** los honorarios del auspicio letrado de la parte accionante, **doctor Pablo A. Torres Barthe**, en el equivalente a la cantidad de 10 JUS con más el aporte de ley e IVA si así correspondiere (arts. 21 y cctes. ley 6716 y decreto ley 8904/77; arts. 1, 2, 16, 21, 28, 30, 43 y 51, ley 14.967). En función de la imposición de costas, no se le regulan honorarios al Dr. Roberto Dávila, atento ser funcionario de la Municipalidad de Azul. El letrado no debe realizar aportes previsionales. Tampoco corresponde el pago de la tasa de justicia (cfme., art. 20, ley 13.928, y 337 del Código Fiscal).-

**Así lo voto**

A LA SEGUNDA CUESTION: El doctor PATERNICO, por las consideraciones expuestas por el doctor FERNANDEZ DE VILLEGAS, adhiere y vota en análogo sentido (arg. Arts. 168 y 171



Constitución de la Provincia de Buenos Aires; SCBA, R 112.328, S del 06.10.2010, autos “*Cabrera, Héctor Daniel v. Ruhl, Juan s/ Despido*”).

A LA MISMA CUESTION: El doctor LABORDE, por las consideraciones expuestas por el doctor FERNANDEZ de VILLEGAS, adhiere y vota en análogo sentido (arg. Arts. 168 y 171 Constitución de la Provincia de Buenos Aires; SCBA, R 112.328, S del 06.10.2010, autos “*Cabrera, Héctor Daniel v. Ruhl, Juan s/ Despido*”).

Suscripto por la Secretaría interviniente, en Azul, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (art 5. II Anexo Único Ac. SCBA 3975/20).

## SENTENCIA

Azul,

**AUTOS Y VISTOS**: A mérito del resultado de la votación y citas legales formuladas en el Acuerdo que antecede, el Tribunal **RESUELVE**:

**1.- HACER** lugar a la acción de amparo promovida y ordenar a la Municipalidad de Azul a que, dentro del plazo de 45 días hábiles, computados desde que adquiera firmeza la presente, ponga a disposición de los actores, en forma completa, veraz y adecuada, la información pública consistente en: **1)**- Copia de los Balances correspondientes a los 48 meses, tanto de los balances anuales, como de los balances realizados mensualmente, y los anexos del mismo, libros de Ingresos y Egresos, etc.; **2)**- Copia Matriz de Costos de utilizada como fundamento para la aprobación de las ordenanzas que fija la tasa destinada al mantenimiento de caminos rurales, presupuestos utilizados para su confección, valores de referencia y demás documentación anexa en la que se base el cálculo consignado en dicha matriz; **3)**- Informe cantidad de Kilómetros de caminos rurales e infraestructura vial a mantener por esa Comuna, detallando caminos

secundarios y terciarios, ancho de los mismos, discriminados por zonas, etc.; **4)-** Informe la cual es la extensión del municipio de Azul, discriminando cantidad de Hectáreas Rurales y Superficie Urbana, y padrón de Propietarios de Inmuebles Rurales y Urbanos; **5)-** Matriz de costos del Mantenimiento de Caminos Rurales, conservación de la vía pública, mantenimiento y conservación tomada como base para la decisión al momento de fijar las tasas vigentes mencionadas; como, asimismo, presupuestos utilizados para su confección, valores de referencia y demás documentación anexa en la que se base el cálculo consignado en dicha matriz; **6)-** Informe Ingresos del Municipio de Azul y durante los últimos cuatro años, discriminando en cada uno de ellos: a)- Conservación de la vía pública; b)- Mantenimiento y conservación; c)- Ingresos por otros Impuestos y tasas urbanas; d)- Contribuciones varias y su objeto- e)- Fondos recibidos de la Provincia de Buenos Aires en concepto de impuestos coparticipables; e)- Fondos recibidos por cualquier otro concepto en el período señalado (Subsidios y/o aportes del gobierno Provincial o Nacional, etc.); **7)-** Las ordenanzas impositivas y el cálculo de recursos y el presupuesto de gastos en los términos del art. 29 de la ley orgánica de municipalidades de los años 2023 y 2024; **8)-** Informe cual fue las últimas 10 acciones de la comuna destinada al mantenimiento de caminos rurales detallando la tarea realizada, la ubicación, su costo y los empleados propios y/o tercerizados que participaron de la misma, debiendo dar respuesta íntegra y detallada a la totalidad de los interrogantes planteados.-

**2.- IMPONER** las costas a la demandada (arts. 19, ley 13.928, y 68, CPCC).-

**3.- REGULAR** los honorarios del auspicio letrado de la parte accionante, ***doctor Pablo A. Torres Barthe***, en el equivalente a la cantidad de **10 JUS** con más el aporte de ley e IVA si así correspondiere (arts. 21 y cctes. ley 6716 y decreto ley 8904/77; arts. 1, 2, 16, 21, 28, 30, 43 y 51, ley 14.967). En función de la imposición de costas, no se le regulan honorarios al Dr. Roberto Davila, atento ser funcionario de la Municipalidad de Azul. El letrado no debe realizar aportes previsionales. Tampoco corresponde el pago de la tasa de justicia (cfme., art. 20, ley 13.928, y 337 del Código Fiscal).-

**4.- REGISTRAR y NOTIFICAR.-**

**5.- COMUNICAR.** A fin de dar cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 58 inc b) de la Acordada 3397 SCBA, notifíquese automáticamente a la Receptoría General de Expedientes

Departamental, para que tome nota de la finalización del juicio, a sus efectos (art.16 de la Res. SCBA 14/21). AZ-494-2021 [receptor-az@jusbuenosaires.gov.ar](mailto:receptor-az@jusbuenosaires.gov.ar)

Se deja constancia que la presente sentencia se notifica electrónicamente de manera automatizada, sin necesidad de otro instrumento (conf. arts. 16 de la Ley 11.653 y art. 10 del Anexo Único Anexo I de la Ac. SCBA 4039/21) a:

20304216485@muni.notificaciones

23236703819@notificaciones.scba.gov.ar

Se hace saber que, "[...] en el marco del dictado de pronunciamientos suscriptos de modo digital, dable es concluir que la elaboración de una única pieza electrónica rubricada por los tres magistrados integrantes del órgano jurisdiccional laboral se ajusta a las exigencias legales y constitucionales [...]" (SCBA LP RI 128.457; S del 10/04/2023, causa "Leguizamón"; arts. 44.f y 47, ley 11.653; y 168, Constitución local).

#### **Como recaudo se transcribe el art. 54 de la Ley 14.967**

*"Las providencias que regulen honorarios deberán ser notificadas personalmente, por cédula a sus beneficiarios, al mandante o patrocinado y al condenado en costas, si lo hubiere. Asimismo, será válida la notificación de la regulación de honorarios efectuada por cualquier otro medio fehaciente, a costa del interesado. Los honorarios a cargo del mandante o patrocinado quedarán firmes a su respecto si la notificación se hubiere practicado en su domicilio real y a la contraparte en su domicilio constituido. Habiendo cesado el patrocinio o apoderamiento y constituido el ex cliente nuevo domicilio, la notificación de honorarios a éste podrá ser efectuada en este último domicilio. En todos los casos, bajo pena de nulidad, en el instrumento de notificación que se utilice para ello, deberá transcribirse este artículo. Los honorarios por trabajos extrajudiciales se abonarán dentro de los diez (10) días de intimado su pago, cuando sean exigibles. Operada la mora, el profesional podrá optar por: a) reclamar los honorarios expresados en la unidad arancelaria Jus prevista en esta ley, con más un interés del 12% anual. b) reclamar los honorarios regulados convertidos al momento de la mora en moneda de curso legal, con más el interés previsto en el artículo 552 del Código Civil y Comercial de la Nación."*

----- Para copiar y pegar el texto seleccione hasta aquí (sin incluir esta línea) -----



FERNANDEZ DE VILLEGAS Bernardo Juan Cecilio  
JUEZ

PATERNICO Marcelo Enrique  
MAGISTRADO SUPLENTE

LABORDE Martin  
JUEZ

CANOSA Alberto Andres  
AUXILIAR LETRADO

